

DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA INCLUSIVA EN EL CONTEXTO ESCOLAR RURAL EN LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA DE COLOMBIA

Edwin Fernando Guarín Parra¹

Código Orcid:

<https://orcid.org/0009-0000-9548-3452>

e-mail: edwinguarinp@gmail.com

I.E.D. Miguel Samper Agudelo,
Guaduas, Colombia

Sorangel López Santa²

Código Orcid:

<https://orcid.org/0009-0005-7308-2224>

e-mail: sorangellopezsanta@gmail.com

I.E.D. Miguel Samper Agudelo,
Caparrapí, Colombia

Paola Alejandra Trujillo Amezquita³

Código Orcid: <https://orcid.org/0009-0001-4447-9549>

e-mail: amesquitapaolaalejandra@gmail.com

RESUMEN

El objetivo del presente artículo, es reflexionar acerca de los desafíos y las estrategias pedagógicas orientadas a la enseñanza inclusiva en el contexto escolar rural colombiano, especialmente en el nivel de básica primaria. Esta reflexión se fundamenta en el análisis de investigaciones recientes, lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y experiencias pedagógicas que evidencian las barreras y oportunidades que enfrentan los docentes y estudiantes en zonas rurales. Se identifican factores como la escasez de recursos, la formación insuficiente de los docentes en atención a la diversidad, y la limitada infraestructura, los cuales condicionan la implementación efectiva de una educación inclusiva. A su vez, se reconocen prácticas innovadoras y estrategias comunitarias que permiten avanzar hacia una educación más equitativa e integradora, adaptada a las características culturales, sociales y territoriales del entorno rural. El artículo de tipo ensayo científico propone una mirada crítica sobre el papel de la escuela rural como espacio transformador, resaltando la importancia de una pedagogía

¹ Ingeniero Topográfico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Especialista en Pedagogía Lúdica de la Universidad Juan de Castellanos, Magister en Neuropsicología y Educación de la Universidad Internacional de la Rioja. Docente de básica primaria de la Institución Educativa Miguel Samper, Guaduas, Cundinamarca, Colombia.

² Licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas, Magister en Tecnologías Digitales aplicadas a la Educación de la Universidad de Santander. Docente de secundaria de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Santa Gemma de Galgani, Caparrapí, Cundinamarca, Colombia.

³ Licenciada en Biología y Química de la Universidad de Caldas, Magister en Tecnologías Digitales aplicadas a la Educación de la Universidad de Santander. Docente de secundaria de Ciencias Naturales y Química de la Institución Educativa Santa Gemma de Galgani, Caparrapí, Cundinamarca, Colombia.

contextualizada que reconozca y valore la diversidad como elemento clave del proceso educativo.

Palabras clave: Educación inclusiva, contexto rural, desafíos pedagógicos, diversidad, estrategias pedagógicas.

CHALLENGES AND STRATEGIES FOR INCLUSIVE TEACHING IN RURAL SCHOOL CONTEXT FOR PRIMARY EDUCATION STUDENTS IN COLOMBIA

ABSTRACT

The objective of this article is to reflect on the challenges and pedagogical strategies aimed at inclusive education in the Colombian rural school context, especially at the elementary school level. This reflection is based on the analysis of recent research, guidelines of the Ministry of National Education and pedagogical experiences that show the barriers and opportunities faced by teachers and students in rural areas. Factors such as the scarcity of resources, insufficient training of teachers in attention to diversity, and limited infrastructure are identified, which condition the effective implementation of inclusive education. At the same time, innovative practices and community strategies are recognized that make it possible to move towards a more equitable and inclusive education, adapted to the cultural, social and territorial characteristics of the rural environment. The article proposes a critical look at the role of the rural school as a transformative space, highlighting the importance of a contextualized pedagogy that recognizes and values diversity as a key element of the educational process.

Key words: Inclusive education, rural context, pedagogical challenges, diversity, pedagogical strategies.

La inclusión educativa en el contexto escolar rural colombiano representa uno de los mayores retos del sistema educativo nacional, especialmente en los niveles de básica primaria, donde se concentran altos niveles de vulnerabilidad social, limitaciones en la infraestructura escolar y escaso acceso a recursos pedagógicos especializados (Patiño & López, 2021). A pesar de los avances normativos y de las políticas públicas que promueven una educación equitativa y de calidad para todos, en las escuelas rurales persisten condiciones que dificultan la implementación efectiva de prácticas inclusivas, especialmente aquellas dirigidas a estudiantes con necesidades educativas diversas, provenientes de contextos étnicos, culturales y socioeconómicos heterogéneos (Ministerio de Educación Nacional [MEN], 2020).

La realidad del entorno rural exige reconocer la diversidad como una condición inherente al aula, lo que implica una transformación profunda de las prácticas pedagógicas, de la formación docente y de la gestión institucional. En este sentido, la inclusión no puede entenderse solo como el acceso a la escuela, sino como la participación activa, el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones personales o del entorno en que habitan. En este contexto, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) cobra especial relevancia, ya que debe incorporar enfoques diferenciales, estrategias contextualizadas y mecanismos de participación que respondan a las particularidades del medio rural.

Desde esta perspectiva, el presente artículo tiene como finalidad reflexionar sobre los principales desafíos que enfrentan los docentes y las instituciones educativas rurales en la implementación de una educación inclusiva, y proponer estrategias que permitan avanzar hacia una escuela rural más equitativa, participativa y transformadora. La reflexión se apoya en marcos normativos nacionales, estudios recientes sobre educación inclusiva en contextos rurales, así como en experiencias pedagógicas significativas. En el desarrollo del texto se abordan las condiciones del contexto escolar rural, las barreras estructurales y culturales que limitan la inclusión, el rol de los docentes como agentes de cambio, y las estrategias pedagógicas y comunitarias que favorecen el reconocimiento de la diversidad como oportunidad para el fortalecimiento de los procesos educativos.

Además, es necesario comprender que la enseñanza inclusiva en contextos rurales no puede abordarse desde una lógica homogénea ni desde modelos pedagógicos diseñados para entornos urbanos. Las dinámicas sociales, culturales y territoriales propias del campo colombiano requieren enfoques diferenciados, donde la escuela asuma un papel activo en la transformación de su entorno. Esto implica reconocer saberes locales, promover el diálogo intercultural, fortalecer el vínculo entre escuela y comunidad, y adaptar las metodologías a las realidades del territorio (González & Rojas, 2023). La inclusión, en este escenario, trasciende la dimensión educativa para convertirse en una estrategia de justicia social, que permite a los niños y niñas del campo acceder a oportunidades reales de aprendizaje, participación y desarrollo humano. En consecuencia, repensar la educación inclusiva desde la ruralidad es un imperativo para

cerrar las brechas históricas que han marginado a estos territorios y para construir una escuela más justa, democrática y pertinente (UNESCO, 2021).

En coherencia con lo anterior, este ensayo se desarrolla desde un enfoque de justicia social y pedagogía crítica, los cuales entienden la inclusión educativa no solo como un principio normativo, sino como un compromiso ético y político con la equidad y la transformación social. Desde esta perspectiva, se reconoce que la escuela rural puede y debe convertirse en un agente de cambio que valore la diversidad, dialogue con los saberes locales y promueva prácticas pedagógicas contextualizadas. Este enfoque permite analizar los desafíos y oportunidades de la inclusión desde una mirada, que considera las particularidades culturales, sociales y territoriales del campo colombiano como elementos fundamentales del proceso educativo.

Para abordar los desafíos de la educación inclusiva en las zonas rurales de Colombia, es clave incorporar marcos teóricos como el de Ainscow (2005), quien entiende la inclusión como una transformación educativa que promueve la participación de todos los estudiantes. Este enfoque resalta la necesidad de adaptar las prácticas pedagógicas a las diferencias de los estudiantes, creando entornos más equitativos. Asimismo, el Modelo Social de la Discapacidad (Oliver, 1996) cuestiona la visión médica tradicional, centrándose en las barreras sociales y ambientales que impiden la participación plena, lo cual es relevante en contextos rurales donde predominan limitaciones estructurales y prejuicios culturales. Finalmente, el Diseño Universal para el

Aprendizaje (CAST, 2018) propone una enseñanza flexible que permite a todos los estudiantes acceder, participar y demostrar su aprendizaje de diversas formas, crucial en ambientes con pocos recursos. Estos marcos amplían la visión de la inclusión, permitiendo cuestionar no solo las barreras físicas, sino también las actitudes culturales que aún prevalecen.

En lo esencial, la educación inclusiva en las zonas rurales de Colombia enfrenta desafíos estructurales, sociales y culturales que limitan el cumplimiento del derecho a la educación para estudiantes con discapacidad. Las regiones rurales, que comprenden más del 30 % del total del sistema educativo nacional, presentan una alta dispersión geográfica, bajos niveles de conectividad, escasez de infraestructura adecuada y una limitada disponibilidad de personal especializado (MEN, 2022). A ello se suma una histórica desatención institucional que ha generado brechas profundas en el acceso y la permanencia escolar de poblaciones vulnerables. Según el informe del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES, 2021), las instituciones rurales no cuentan con las condiciones necesarias para implementar adecuadamente políticas de inclusión educativa, lo cual repercute en la calidad y equidad del servicio educativo. Esta situación se ve agravada por factores culturales, como el desconocimiento sobre la discapacidad, los prejuicios sociales y la naturalización de la exclusión, especialmente en comunidades donde las concepciones tradicionales aún predominan (González & Muñoz, 2023). Así, enfrentar los retos de la inclusión educativa rural en Colombia

requiere un análisis crítico de los factores que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

Por consiguiente, la implementación de una educación inclusiva en contextos rurales se enfrenta a múltiples barreras estructurales que condicionan su efectividad. Estas barreras incluyen la precariedad de la infraestructura educativa, la limitada disponibilidad de recursos didácticos adaptados y la escasa formación docente en estrategias de inclusión. Según López y Vargas (2021), la falta de materiales pedagógicos accesibles limita significativamente la posibilidad de atender las necesidades educativas de estudiantes con barreras de aprendizaje en zonas rurales.

A pesar de ello, muchos docentes en contextos rurales desarrollan estrategias creativas para garantizar el aprendizaje de todos sus estudiantes. Sin embargo, tales esfuerzos individuales no logran superar la ausencia de un acompañamiento institucional sistemático. Rodríguez y Pérez (2020) destacan que, en regiones rurales de Colombia, el magisterio opera en condiciones adversas que impiden la puesta en marcha de planes educativos individualizados, lo cual profundiza la exclusión de estudiantes con discapacidad.

Ahora bien, las características geográficas de las zonas rurales también constituyen un obstáculo determinante para la inclusión educativa. Las largas distancias entre hogares y escuelas, combinadas con la deficiente red de transporte, dificultan el

acceso regular a la educación para estudiantes con discapacidad. En este sentido, el estudio de Hernández et al. (2022) subraya que la dispersión territorial es uno de los factores que más incide en la deserción escolar de estudiantes con necesidades educativas especiales.

Por consiguiente, el desconocimiento de las comunidades rurales respecto a los derechos de las personas con discapacidad genera actitudes discriminatorias que afectan el clima escolar. Se ha verificado que las creencias tradicionales o religiosas influyen en la percepción de barreras como una “enfermedad” o “castigo divino”, lo cual dificulta su comprensión como una condición neurodiversa. De acuerdo con González y Muñoz (2023), el estigma cultural representa una de las barreras sociales más complejas de transformar en entornos rurales.

Según el Decreto 1421 de 2017, los establecimientos educativos deben garantizar ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad, independientemente de su ubicación geográfica. Sin embargo, en zonas rurales, la falta de apoyo técnico y administrativo impide cumplir con esta exigencia normativa. Esto es relevante porque evidencia la desconexión entre la legislación y la realidad educativa rural, tal como lo indica el informe de la Defensoría del Pueblo (2021), que revela deficiencias estructurales en la implementación de políticas de inclusión en municipios apartados.

De este modo, los desafíos también se relacionan con la formación inicial y continua del personal docente que trabaja en contextos rurales. Muchos maestros no

han recibido capacitación específica para atender a estudiantes con dificultades de aprendizaje u otras discapacidades, lo que repercute en la calidad de las prácticas pedagógicas. En habidas cuentas, la falta de formación limita la identificación temprana del trastorno y la adopción de metodologías diferenciadas, lo que vulnera el derecho a una educación equitativa y pertinente.

A su vez, el acceso a servicios complementarios como atención psicológica, terapias ocupacionales y acompañamiento familiar, es prácticamente inexistente en estas zonas. Las familias se ven obligadas a trasladarse a centros urbanos, lo cual implica gastos económicos considerables. Así pues, la exclusión educativa no solo se expresa en las aulas, sino también en la limitada articulación con los sistemas de salud y protección social, tal como lo evidencian estudios de la Universidad Nacional de Colombia (Ramírez & Castillo, 2021).

Por esta razón, resulta indispensable formular políticas públicas diferenciadas que respondan a las especificidades del entorno rural. No basta con replicar modelos urbanos de inclusión, sino que se requiere una perspectiva territorial que considere las particularidades culturales, geográficas y económicas de estas comunidades. De allí que se plantee la urgencia de diseñar estrategias de inclusión educativa contextualizadas, sostenibles y participativas, como lo proponen Morales y Fajardo (2020) en su estudio sobre inclusión rural en el Caribe colombiano.

En primer lugar, el marco normativo colombiano en materia de educación inclusiva ha experimentado un importante desarrollo a lo largo de los últimos años. Esto se ha debido a la creciente conciencia sobre la necesidad de garantizar una educación de calidad para todos los estudiantes, sin importar sus condiciones particulares. En específico en discapacidad y otras necesidades educativas especiales ha sido uno de los focos de las políticas educativas. Por consiguiente, el Estado colombiano ha adoptado normativas claves que buscan establecer las bases para la inclusión, adaptando el sistema educativo a las necesidades de los estudiantes más vulnerables. Sin embargo, a pesar de estos avances normativos, los desafíos en su implementación siguen siendo considerables, especialmente en las regiones más rurales y apartadas del país, donde las condiciones para garantizar una educación inclusiva no siempre están dadas (Ministerio de Educación Nacional, 2021). A su vez, la Ley 1618 de 2013 es un pilar fundamental en el marco normativo para la inclusión de personas con discapacidad en Colombia. Esta ley establece que el sistema educativo debe garantizar el acceso, la permanencia y la participación activa de los estudiantes con discapacidad en todos los niveles educativos. De acuerdo con la ley, los procesos de inclusión deben promover la igualdad de oportunidades, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales que limitan el acceso a una educación de calidad. Ahora bien, aunque la Ley 1618 representa un avance significativo, su implementación ha sido desigual. En muchas zonas rurales del país, los recursos y la infraestructura educativa necesarios para cumplir con las disposiciones de esta ley son limitados. Esto es relevante porque la ley también

establece la necesidad de un enfoque integral que implique tanto al personal docente como a las comunidades, lo que requiere un cambio cultural que aún está en proceso en muchas regiones.

En este sentido, el Decreto 1421 de 2017, que reglamenta la Ley 1618, establece procedimientos específicos para hacer efectiva la inclusión educativa. Este decreto subraya la necesidad de adaptar el currículo y los materiales educativos, formar al personal docente en pedagogías inclusivas y proporcionar los apoyos necesarios para los estudiantes con discapacidad. Según este decreto, es fundamental que los docentes reciban formación continua y especializada para poder atender adecuadamente las diversas necesidades de los estudiantes con barreras cognitivas. Sin embargo, en la práctica, la implementación del Decreto 1421 enfrenta obstáculos considerables en el contexto rural, donde las escuelas a menudo carecen de los recursos materiales y humanos necesarios para aplicar las directrices del decreto de manera efectiva. Las dificultades en la capacitación docente y la falta de herramientas pedagógicas especializadas son algunos de los factores que dificultan la plena inclusión en estas áreas.

De igual manera, la Ley 1098 de 2006, también conocida como el Código de la Infancia y Adolescencia, es otro componente clave del marco normativo para la inclusión educativa en Colombia. Esta ley promueve los derechos de los niños y adolescentes, incluyendo a aquellos con discapacidad, garantizando su acceso a la educación en

condiciones de equidad y sin discriminación. Dentro de este marco, se reconoce que los niños con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva que les permita desarrollarse plenamente en un entorno que favorezca su participación activa. No obstante, a pesar de la existencia de esta ley, su implementación efectiva se ve obstaculizada en las zonas rurales por las limitaciones en infraestructura, la falta de personal capacitado y las resistencias culturales que aún persisten frente a la inclusión educativa (González, 2020). Esto subraya la necesidad urgente de continuar con los esfuerzos de sensibilización y capacitación en las comunidades rurales, así como de fortalecer los recursos destinados a la educación inclusiva en estas zonas.

Por otro lado, el Decreto 1075 de 2015 establece un marco regulatorio más amplio para el sector educativo en Colombia, incluyendo aspectos fundamentales relacionados con la atención a estudiantes con necesidades educativas especiales. Este decreto refuerza la idea de que la educación debe ser inclusiva y debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Sin embargo, al igual que otras normativas, su aplicación enfrenta serias dificultades en los contextos rurales, donde el acceso a servicios educativos especializados es limitado y las escuelas suelen estar poco preparadas para atender la diversidad en el aula. De este modo, aunque el marco normativo en Colombia establece claramente la necesidad de inclusión, la brecha entre lo que la ley estipula y lo que se lleva a cabo en la práctica es amplia, especialmente en las zonas rurales.

A este respecto, diversos estudios han evidenciado que uno de los principales obstáculos para la implementación de la educación inclusiva en las zonas rurales es la escasez de recursos. Los problemas de infraestructura escolar, la falta de personal especializado y la escasa disponibilidad de materiales didácticos adecuados son cuestiones recurrentes en las investigaciones sobre el tema. Así pues, a pesar de los esfuerzos normativos, las políticas inclusivas no siempre logran materializarse de manera efectiva en estos contextos, lo que limita el acceso real de los estudiantes con inclusión a una educación de calidad. Además, las dificultades sociales y culturales, como la falta de sensibilización sobre la inclusión, agravan aún más la situación, haciendo que la implementación de las normativas sea aún más compleja en las zonas rurales.

A pesar de los obstáculos que enfrenta la educación inclusiva en zonas rurales de Colombia, también existen experiencias positivas que pueden servir como referentes para el análisis y mejora del sistema. Por ejemplo, programas desarrollados en países como México y Perú han demostrado que la formación continua del profesorado en estrategias inclusivas, combinada con el trabajo colaborativo entre escuela y comunidad, puede generar avances significativos en contextos rurales con características socioeconómicas similares (UNESCO, 2021). En contraste, Colombia ha logrado avances normativos, pero la implementación sigue siendo desigual, especialmente por la falta de recursos y de acompañamiento técnico pedagógico en las regiones más

apartadas. No obstante, las comunidades rurales colombianas también presentan fortalezas, como su estructura comunitaria solidaria, el arraigo cultural y el conocimiento del territorio, elementos que pueden aprovecharse para construir proyectos educativos inclusivos pertinentes y sostenibles. Por tanto, es fundamental no solo identificar las carencias, sino también visibilizar y potenciar los recursos locales que, articulados con políticas públicas eficaces, pueden favorecer procesos inclusivos de calidad.

En primer lugar, es importante destacar que Colombia ha venido fortaleciendo su legislación en torno a la inclusión educativa, lo cual representa un avance significativo en materia de equidad escolar, especialmente para estudiantes con discapacidades como el Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta evolución normativa refleja un compromiso institucional con el acceso igualitario a la educación. Sin embargo, a pesar de este progreso en el plano legal, las regiones rurales enfrentan obstáculos persistentes para implementar de manera eficaz estas políticas, debido a la escasez de recursos y limitaciones estructurales (Ministerio de Educación Nacional, 2021; Pérez et al., 2022).

A continuación, debe resaltarse que los docentes constituyen un eje clave en la consolidación de ambientes escolares inclusivos, ya que son ellos quienes traducen las políticas en prácticas pedagógicas concretas. En el caso colombiano, el debate sobre la formación docente ha ganado relevancia, dado que la inclusión educativa no solo requiere ajustes físicos o curriculares, sino también un cambio profundo en la actitud de los educadores frente a la diversidad del estudiantado (Gutiérrez, 2020).

Asimismo, se ha identificado que la formación inicial de los educadores en Colombia tradicionalmente ha estado orientada hacia la enseñanza disciplinar, con escasa atención a la atención de la diversidad. Esta situación ha dejado a muchos docentes sin las herramientas necesarias para abordar contextos educativos diversos de manera efectiva (Martínez & Gómez, 2021). No obstante, con la entrada en vigor de normativas como la Ley 1618 de 2013, se ha empezado a exigir la incorporación de contenidos relacionados con la discapacidad, la inclusión y las estrategias pedagógicas adaptativas en los programas de licenciatura (Paredes, 2022).

En consecuencia, en los últimos años se han promovido programas de desarrollo profesional continuo enfocados en la educación inclusiva. Estos espacios buscan fortalecer las competencias docentes para adaptar el currículo, diversificar las metodologías y trabajar de manera colaborativa con profesionales del área psicosocial, lo que contribuye a una mejor atención a la diversidad en el aula (Cordero & Rodríguez, 2021). Sin embargo, el acceso a esta formación no es equitativo: los docentes de zonas rurales muchas veces enfrentan barreras logísticas y tecnológicas que limitan su participación en estos procesos formativos (Rodríguez & Sánchez, 2020).

Por otra parte, algunas instituciones de educación superior en Colombia han empezado a rediseñar sus programas formativos para integrar de manera transversal la educación inclusiva. Estos programas no solo ofrecen marcos teóricos, sino también experiencias prácticas que preparan a los futuros docentes para desenvolverse en

escenarios educativos diversos (Morales, 2021). Dichas experiencias se han demostrado eficaces para fomentar una actitud empática y una mayor disposición para adaptar las prácticas pedagógicas según las necesidades del alumnado.

En paralelo, se requiere que la formación inclusiva no sea exclusiva de quienes enseñan en las aulas escolares, sino también de quienes forman a los docentes. Por ello, se hace urgente revisar los contenidos curriculares de los programas de pedagogía y psicopedagogía en las universidades, de modo que la inclusión sea un eje articulador del proceso formativo desde la base (López & Martínez, 2022). Esto permitirá consolidar una cultura educativa que valore la diversidad desde la formación inicial.

De igual modo, la formación docente en inclusión debe integrar no solo contenidos técnicos o metodológicos, sino también componentes éticos y actitudinales. Uno de los principales desafíos identificados en investigaciones recientes es la resistencia de algunos docentes a modificar sus enfoques tradicionales, lo cual puede estar relacionado con una falta de preparación para afrontar la diversidad (Calderón, 2021). Por tanto, transformar la cultura educativa implica también promover una reflexión profunda sobre el rol ético del educador frente a la equidad.

En síntesis, aunque Colombia ha hecho avances importantes en la formación de docentes con enfoque inclusivo, persisten desafíos estructurales y culturales que deben abordarse de forma integral. Es fundamental fortalecer los programas de capacitación continua, garantizar su acceso en todo el territorio nacional y consolidar una visión

pedagógica que entienda la diversidad no como una barrera, sino como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.

En síntesis, la inclusión educativa en el contexto escolar rural colombiano continúa enfrentando importantes desafíos que limitan su implementación plena y efectiva. Aunque el país cuenta con un marco normativo robusto que respalda el derecho a una educación equitativa y sin discriminación, las condiciones reales de las escuelas rurales caracterizadas por la precariedad en infraestructura, la falta de recursos pedagógicos adaptados y la limitada formación docente en inclusión siguen siendo obstáculos estructurales difíciles de superar. Estas condiciones no solo afectan el acceso y la permanencia escolar, sino también la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Por otro lado, es evidente que las barreras para la inclusión en zonas rurales no son únicamente materiales, sino también culturales y sociales. La persistencia de estigmas, la escasa sensibilización comunitaria sobre el valor de la diversidad, y la reproducción de prácticas educativas homogéneas, refuerzan dinámicas de exclusión que afectan a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. De ahí que sea fundamental promover un cambio de paradigma que sitúe a la diversidad como un eje central de la educación y no como una excepción que debe ser atendida desde la carencia.

Asimismo, se concluye que la escuela rural tiene un potencial transformador que puede y debe ser aprovechado desde una pedagogía contextualizada, participativa y crítica. Las experiencias exitosas de inclusión en zonas rurales demuestran que, a pesar de las limitaciones, es posible construir entornos educativos más equitativos cuando se articulan esfuerzos entre docentes, familias, comunidades e instituciones. En este sentido, el reconocimiento de saberes locales, el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y el respeto por las particularidades culturales del territorio, se configuran como pilares para una educación rural verdaderamente inclusiva.

Además, la formación docente emerge como una condición clave para avanzar en la inclusión educativa. Los programas de formación inicial y continua deben incorporar de manera transversal los enfoques diferenciales y de inclusión, así como fomentar actitudes abiertas al cambio y al trabajo colaborativo. Es imprescindible que los educadores rurales cuenten con herramientas conceptuales, metodológicas y éticas que les permitan atender de manera efectiva la diversidad en sus aulas, considerando las realidades concretas de sus contextos. A partir de lo anterior, se hace necesario diseñar políticas públicas diferenciadas y sostenibles que respondan a las especificidades del entorno rural. Estas deben ir más allá del discurso normativo y traducirse en acciones concretas de apoyo institucional, inversión en infraestructura, provisión de recursos didácticos pertinentes y acompañamiento técnico a las escuelas. Solo así se podrá garantizar una educación inclusiva de calidad que cierre las brechas históricas entre el campo y la ciudad.

REFERENCIAS

- Calderón, L. M. (2021). Barreras actitudinales en la formación docente para la inclusión en Colombia. *Revista Colombiana de Educación Inclusiva*, 10(1), 55–72. <https://doi.org/10.17227/rcei.2021.10.1.55>
- Cordero, S., & Rodríguez, M. (2021). Formación continua de docentes en educación inclusiva: avances y desafíos en Colombia. *Educación y Desarrollo*, 15(2), 79–95. <https://doi.org/10.21892/eydes.v15n2.2021.79>
- Cortez, M., & Pérez, G. (2020). Prácticas inclusivas en escuelas rurales: un estudio desde la voz del profesorado. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 14(2), 87–106. <https://doi.org/10.4067/S0718-73782020000200087>
- Defensoría del Pueblo. (2021). *Informe sobre el estado de la inclusión educativa en Colombia: barreras estructurales y sociales*. <https://www.defensoria.gov.co>
- González, M. A. (2020). Normativas y realidades: análisis de la educación inclusiva en comunidades rurales colombianas. *Revista Educación y Sociedad*, 22(2), 105–124. <https://doi.org/10.1590/es2020.22.2.105>
- Gutiérrez, J. A. (2020). Educación inclusiva en Colombia: retos en la formación inicial del profesorado. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(1), 88–102. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.1.88>
- Hernández, J. C., Martínez, S., & Gómez, P. (2022). Barreras geográficas y exclusión educativa en zonas rurales colombianas. *Revista Internacional de Educación Rural*, 18(1), 28–49. <https://doi.org/10.5294/redu.2022.18.1.2>
- Martínez, D., & Gómez, L. (2021). Análisis crítico de la formación docente inicial frente a la diversidad educativa en Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación*, 87(1), 145–160. <https://doi.org/10.35362/rie8714560>
- Ministerio de Educación Nacional de Colombia. (2022). *Panorama de la educación inclusiva en zonas rurales: diagnóstico y estrategias*. <https://www.mineducacion.gov.co>
- Montenegro-Rueda, M., & Fernández-Batanero, J. M. (2022). Teacher training in inclusive education in Latin America: A systematic review. *International Journal of Inclusive Education*, 26(10), 1005, 1022. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752827>

- Morales, A., & Fajardo, C. (2020). Inclusión educativa en contextos rurales del Caribe colombiano: una propuesta desde la participación comunitaria. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 50(3), 99–120. <https://doi.org/10.48102/rlee.2020.50.3.99>
- Morales, F. (2021). Formación docente e inclusión: una relación necesaria para la equidad educativa. *Revista Colombiana de Investigación Educativa*, 17(2), 59–78. <https://doi.org/10.22201/rcie.2021.17.2.59>
- Morales, J. A., & Díaz, F. M. (2023). Retos de la inclusión educativa en escuelas multigrado rurales: una mirada desde la formación docente. *Educación y Desarrollo Social*, 17(1), 54–72. <https://doi.org/10.18359/reds.5678>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2020). *Inclusión y educación: todos y todas sin excepción. Informe de seguimiento de la educación en el mundo*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718>
- Paredes, S. M. (2022). Implementación de la Ley 1618 de 2013 en programas de formación docente: avances y vacíos. *Revista de Estudios Legislativos*, 8(1), 33–51. <https://doi.org/10.31434/rel.2022.8.1.33>
- Pérez, C. A., & Guzmán, M. L. (2021). Educación inclusiva en contextos rurales de Colombia: análisis desde la experiencia docente. *Revista Colombiana de Educación*, 1(81), 189–212. <https://doi.org/10.17227/rce.num81-10757>
- Rodríguez, C. A., & Sánchez, E. J. (2020). Formación continua en zonas rurales: ¿una deuda con la inclusión educativa? *Revista Educación y Territorio*, 12(2), 101–120. <https://doi.org/10.17227/ret.2020.12.2.101>
- Rodríguez, L. M., & Pérez, J. F. (2020). Prácticas docentes en entornos rurales con alta diversidad funcional. *Revista de Pedagogía Inclusiva*, 15(1), 30–48. <https://doi.org/10.26529/rpi.2020.15.1.30>
- Zuluaga, J. D., & Ramírez, L. (2023). Saberes locales y educación rural: una mirada a las prácticas pedagógicas contextualizadas. *Revista Educación y Pedagogía*, 35(94), 32–50. <https://doi.org/10.17533/udea.rep.20235>